

**07 6 2014 El Deber**

### **El sector ganadero normaliza la oferta de carne, salvo en Beni**

A medida que el escenario climatológico mejora en Santa Cruz la oferta y la provisión de carne vacuna en los centros de faena y en los mercados se normaliza. No ocurre lo propio en Beni, donde el sector pecuario reporta un déficit en la oferta de la proteína animal.

Fuentes sectoriales pecuarias de Santa Cruz dieron cuenta de que, al presente, la oferta cárnica se restituyó en la proporción habitual que comprende entre 1.200 y 1.500 reses que se faenan por día para cubrir el consumo de la población cruceña y de La Paz. Del global, 500 vacunos se destinan a este distrito.

Según el gerente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Héctor Sandoval, la merma de la oferta de proteína roja en los mataderos se dio por el mal estado de los caminos que limitaron el transporte de ganado a los centros de remate y de faena.

El ejecutivo desveló que las lluvias gravitaron en las actividades del sector, dado que, conforme con el reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), en el primer semestre del año llovió 108 días.

En Beni, el panorama es opuesto en el ámbito productivo. A decir del gerente de la federación de ganaderos de esta región, Carmelo Arteaga, la provisión de ganado para cubrir el consumo en Trinidad sigue siendo débil. Dijo que de las 100 reses que se requieren para surtir este mercado solo llegan 80 porque las carreteras que vinculan con zonas productivas que se concentran en San Ignacio de Moxos, San Ramón y Loreto son inestables.

Referente al potenciamiento del sector ganadero que resultó golpeado por las inundaciones, Arteaga dio cuenta de que hasta el momento el Gobierno no desembolsó ni un centavo de los \$us 30 millones que ofreció para encarar el plan de repoblamiento ganadero. Criticó el lento accionar gubernamental.

### **Carniceros, con plan sectorial**

Desde la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol), el secretario ejecutivo, Bernabé Quispe, informó de que si bien esperan una respuesta del Gobierno al planteamiento que hicieran en torno a la libre importación de carne no se cierran a discutir con los ganaderos cruceños la probabilidad de negociar la venta directa de carne (productor-detallista) para bajar los precios de este producto en los mercados.

Dijo que esta es la salida más viable para ‘borrar’ a los intermediarios (capitalistas que compran ganado vivo en los remates y centro de faena) de la cadena productiva cárnica.

Piden al Gobierno que autorice la importación sin arancel de equipos y unidades de transporte para acarrear carne

### **Estudio revela cuatro frenos para el despegue vitivinícola**

El sector vitivinícola de Bolivia -según el reciente estudio socioeconómico de la cadena uvas, vinos y singanis- refleja que los altos tributos del ICE, el tipo de cambio del dólar que favorece a los importadores, la producción clandestina y el contrabando complican su despegue productivo.

De los \$us 35,3 millones que genera anualmente el sector vinero en ventas, la producción legal representa un 49,5%, la importación legal un 14,49%, la producción clandestina el 10,61% y el contrabando un 25,38% (\$us 8,9 millones).

Para Tarija el golpe es más fuerte habida cuenta de que es el mayor productor (representa el 3,7% del PIB chapaco) del país con sus 2.320 hectáreas de uva de un total de 2.855 ha.

En el caso del singani, cuyas ventas suman \$us 30,9 millones anuales, el lío es por la producción clandestina, que llega al 32,79% (\$us 10,1 millones).

Otro factor negativo, en criterio del titular de la Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas (ANIV), Franz Molina, es el cobro del Impuesto al Consumo Específico (ICE) para el vino y el singani (Bs 2,64 por litro) y el ICE alícuota porcentual aplicado solo al singani. Ambos cobros favorecen a los importadores legales, que no lo pagan y los pone en ventaja de precios en el mercado.

Con el tipo de cambio invariable, los importadores y contrabandistas, según Molina, también ganan, ya que compran dólar barato y lo revenden en el mercado negro argentino con lo que internan bebidas y las venden a precios bajos.

Las perspectivas de crecimiento para este año no varían, según Molina, por el estrangulamiento del sector. Oscilará entre el 10 y 15%. La producción legal nacional de vino llega a 5 millones de litros anuales y de singani a 3,6 millones. La demanda nacional es de 11,2 millones de litros de vino y 6,4 millones de litros de singani.

### **Recursos estatales**

El director general de Planificación del Ministerio de Agricultura, Miguel Murillo, enfatizó que el Gobierno puso a disposición una línea de financiamiento a los actores de la cadena vitivinícola del país a través del Banco de Desarrollo Productivo (BDP)

### **Algunas bodegas no estarán en el festival**

Este año, según lo confirmó la ANIV, bajará un 50% la participación de las bodegas bolivianas en el Festival Internacional de Vinos y Quesos que será del 16 al 19 del mes en curso en el pabellón Brasil de la Fexpocruz.

Las cinco, de 10 bodegas afiliadas a la institución, que participarán del evento son Bodega Kuhlmann & Cia Ltda, Bodegas Kohlberg, Bodegas Aranjuez, Bodega Casa Real y Bodega Campos de Solana.

El motivo de fondo, según explicó el presidente de la ANIV, Franz Molina, es que con la culminación del programa de apoyo financiero y técnico de los Países Bajos para la cadena vitivinícola, también se acabó el apoyo para participar en eventos como el festival de vinos. Los que confirmaron su presencia lo harán con recursos de su billetera.

Consultado sobre el tema, el organizador del evento internacional, Fernando Terrazas, señaló que no le afecta habida cuenta de que tiene copado el pabellón Brasil con 50 expositores entre nacionales y extranjeros.

Precisó que tiene registradas a 15 bodegas de Tarija y que las que no logran patrocinio, la Gobernación las apoya. Estarán expositores de vino, queso y fiambres.

### **Deforestación baja a un tercio en tres años**

La destrucción de los bosques se ha reducido a un tercio desde 2010, según un informe presentado por el director de la Administradora de Bosques y Tierras (ABT), Clíver Rocha. “Bolivia está a la vanguardia de los países de América Latina”, señaló al exhibir los resultados de las gestiones que incluyeron mayor control, multas y nuevas normas destinadas a preservar los recursos naturales.

Para alcanzar esos resultados se aprobaron nuevas normas que prohíben el cambio de uso de suelo, pena de cárcel y elevadas multas para quienes chaqueen grandes extensiones de tierra.

Rocha admitió que en el proceso hubo presiones de todo tipo y que, en este momento, prevalecen las que pretenden que se disminuya la rigidez de los controles.

La ABT tiene 400 funcionarios, 200 de los cuales están en los bosques fiscalizando, a lo que se suma el uso de tecnología para ejercer el control. Además, explicó que se ha pedido apoyo al Ejército, ya que la Policía no dio buenos resultados.

## **Pendiente**

Para el director de la ABT aún hay retos por cumplir como la fiscalización en zonas como el Choré, donde prevalece el descontrol, a pesar de decomisos de maquinaria pesada utilizada para deforestar.

Asimismo, consideró que el reto mayor es generar un proceso de recuperación de los bosques que ya fueron destruidos, proceso en el que buscará la participación de todos los sectores afectados: pequeños y grandes productores y también de las autoridades locales, de manera que en un esfuerzo conjunto haya más compromiso para cuidar los bosques

## **Datos según cifras de la ABT**

Las cifras de la deforestación

En 2010 se deforestaron 212.274 hectáreas de bosques, mientras que la cifra cayó a 76.576 hectáreas en 2013.

Reducción de focos de calor

En 2010 hubo 59.962 quemas de bosques. La cifra se redujo a 19.646 focos de calor en 2013, según los datos que proporcionó la ABT.

Superficie quemada

El año 2010 fue el de mayor superficie quemada por los chaqueos. Se perdieron 4.888.953 hectáreas de bosques. La cifra se redujo a 1.422.062 en 2013

## **Página Siete**

### **Hay 22 proyectos industriales que costaron \$us 1.113 millones**

El Gobierno puso en marcha, desde el año 2006, 22 proyectos de industrialización, con una inversión de más de 1.113,6 millones de dólares, según la publicación *Bolivia, una mirada a los logros más importantes del nuevo modelo económico*.

El documento fue elaborado por el Ministerio de Economía.

Entre los emprendimientos más importantes y millonarios se encuentran la planta separadora de líquidos de Río Grande, con una inversión de 183,4 millones de dólares, y la planta piloto de baterías de ion litio en La Palca de 400 millones de dólares.

También está en ejecución la generadora de electricidad ciclo combinado de Guaracachi, de 102,2 millones de dólares.

Están en proceso de construcción otros 17 emprendimientos con una inversión de 6.703 millones de dólares (ver apoyo).

El economista Enrique Velazco opina que la separación de líquidos es un proceso físico que no implica industrialización. Sin embargo, el etano, propano y butano extraídos sirven para alimentar industrias como la producción de amoníaco y urea, que posteriormente pueden abastecer las plantas de propileno, polietileno y derivados.

En el caso de la hidrometalurgia, la industrialización del litio corresponde a transformaciones de recursos naturales para producir commodities o materias primas (cobre, carbonato de litio) o productos finales (baterías). Son procesos intensivos en capital, pero mínima creación de empleo.

Añadió que las fábricas de ácido sulfúrico, cemento, papel y cartón producirán insumos destinados a otras industrias.

Las de palmito, lácteos, almendras, semillas y bimate permitirán transformar recursos naturales renovables en productos de consumo final. Se consideran manufacturas livianas y su viabilidad depende de las ventajas comparativas (en algunos casos podrían tener ventajas competitivas).

"La pregunta de fondo es si se justifica que el Estado invierta recursos en este tipo de actividades que normalmente deberían ser asumidas por los actores privados, individuales o colectivos", precisó.

Las termoeléctricas no son industrias en el sentido "tradicional": sólo queman el gas para generar vapor y producir electricidad alimentando de vapor a las turbinas. No generan empleo, añadió.

**Página Siete**

## **CIPCA**Notas

Boletín Virtual No 552, Año 13, mes de 2014.  
RED de comunicación del personal de CIPCA-Bolivia

[www.cipca.org.bo](http://www.cipca.org.bo)

---

### **El G77 y el mundo rural**

**Lorenzo Soliz Tito (\*)**

Se ha dicho ya bastante, desde diferentes perspectivas y con diversos propósitos sobre la Cumbre del G77 y la Declaración de Santa Cruz. Por un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien. Aquí queremos referirnos a temáticas vinculadas con el mundo rural: desarrollo sostenible, la agricultura, y soberanía y seguridad alimentaria.

Se reafirman postulados de anteriores cumbres y llama la atención que no se hayan tomado compromisos más claros y decididos sobre el hambre, la producción de alimentos, el rol y posición de los denominados agricultores familiares. Asimismo, que ni una sola vez se hace referencia a la soberanía alimentaria, noción sobre la que el Gobierno boliviano hizo un enorme esfuerzo en el desarrollo normativo al respecto. Veamos.

Por un lado, se expresa una profunda preocupación por la continua inseguridad alimentaria, la extrema volatilidad de los precios de los productos básicos y los problemas que plantea el cambio climático para los países en desarrollo (44). Se reafirma: "el hambre es una violación de la dignidad humana e instamos a que se adopten medidas urgentes en los planos nacional, regional e internacional para eliminarla. Reafirmamos también el derecho de toda persona a disponer de alimentos sanos y nutritivos de conformidad con su derecho a una alimentación adecuada y su derecho fundamental a no padecer hambre ... reafirmamos también nuestro compromiso de aumentar la seguridad alimentaria y el acceso de las generaciones presentes y futuras a alimentos suficientes, sanos y nutritivos..."(68).

Se denuncia, adecuadamente, "que las subvenciones y otras

distorsiones del mercado impulsadas por los países desarrollados han perjudicado gravemente al sector agrícola de los países en desarrollo, limitando la capacidad de este sector fundamental para contribuir significativamente a la erradicación de la pobreza y a un crecimiento económico sostenido e incluyente, al desarrollo sostenible y equitativo, a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural. Pedimos que se anulen de inmediato todas las formas de subvenciones agrícolas y otras medidas adoptadas por los países desarrollados que distorsionan los mercados...” (69). Sin embargo, no se menciona ni una palabra sobre las transnacionales, el agronegocio, el agroextractivismo, la compra y disputa por tierras y otros recursos naturales que campean en la región latinoamericana y africana desalojando o poniendo en riesgo la vida de comunidades locales sean campesinas o indígenas.

Se pone de relieve "la urgente necesidad de intensificar en los planos nacional, regional e internacional los esfuerzos para alcanzar la seguridad alimentaria y el desarrollo agrícola... (se exige) una financiación sostenida y más inversiones dirigidas concretamente a aumentar la producción de alimentos en el mundo, y pedimos recursos financieros nuevos y adicionales de todas las fuentes para materializar el desarrollo agrícola sostenible y la seguridad alimentaria". (72). No queda claro quiénes serán los sujetos que aumentarán la producción de alimentos y tampoco hay un compromiso de incrementar inversiones propias con fondo públicos; se limitan a pedir y exigir financiación, cuando es exactamente lo contrario que manifiestan muchos gobiernos.

Se pone de relieve "la necesidad de fortalecer el sector agrícola... destacando la importancia de que en las estrategias nacionales, regionales e internacionales dirigidas a alcanzar esa seguridad se incluyan los conocimientos, las prácticas y las tecnologías propias de los pueblos indígenas, las comunidades rurales y los pequeños y medianos productores agrícolas" (73) pero no queda claro si el interés es sólo por los conocimientos y prácticas o también por esos pueblos y comunidades en tanto que sujetos productivos y económicos.

Igualmente, consideramos que no sirve de mucho reconocer "la función positiva que desempeñan los pequeños agricultores y las explotaciones familiares, incluidas las mujeres, las cooperativas, los pueblos indígenas y las comunidades locales de los países en desarrollo, así como sus conocimientos y prácticas en la conservación y el uso sostenible de las semillas, la biodiversidad agrícola y la biodiversidad vinculada a la producción de alimentos de las generaciones presentes y futuras" (78), si no se toma una postura y una decisión clara de potenciarlos y fortalecerlos precisamente

porque contribuyen a la seguridad alimentaria, pero cada vez más en condiciones desventajosas. La Declaración es tímida e indecisa.

Es más, sólo se atina a decir que "debería prestarse apoyo a la actividad económica de la agricultura familiar sostenible... a fin de mejorar su situación y promover su desarrollo, en particular facilitando su acceso a los servicios financieros, los recursos productivos y los insumos agrícolas, como las tierras, las semillas, los medios tecnológicos adecuados, el transporte y la información" (81). Nuevamente la indecisión.

Al final hay una tímida expresión que sostiene: "Fomentaremos la adopción de medidas exhaustivas y complementarias tanto a nivel nacional como regional en materia de producción, acceso y consumo sobre la base de una planificación integral, multisectorial y participativa, volviendo a evaluar y fortaleciendo la agricultura familiar sostenible, las pequeñas explotaciones agrícolas, y las prácticas agrícolas de los pueblos indígenas y los afrodescendientes" (82), sin dejar claro qué van a volver a evaluar.

(\*) Lorenzo Soliz es director general de CIPCA.

---

Artículo publicado el domingo 6 de julio en Página Siete.

*Lunes, 07 Julio 2014*